



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Pleno. Sentencia 449/2023

EXP. N.º 00941-2022-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2023, en sesión de Pleno Jurisdiccional, los magistrados Morales Saravia (presidente), Pacheco Zerga (vicepresidenta), Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich han emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el procurador público encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contra la resolución de fojas 645, de fecha 27 de mayo de 2019, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 6 de noviembre de 2007 (f. 26), la procuradora adjunta a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), interpone demanda de amparo contra el juez mixto del Módulo Básico de Justicia de Baños del Inca de la Corte Superior de Cajamarca, los jueces superiores integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de Cajamarca y los jueces supremos integrantes de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, y pide que se ponga en conocimiento del procurador público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial. Plantea como pretensión que “se declare inaplicable al Estado - Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar - Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca - Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social” (sic): a) el auto calificadorio del recurso de Casación n.º 3893-2007 – Cajamarca, que declaró improcedente el recurso de casación; b) la sentencia de primera instancia de fecha 29 de diciembre de 2006; y c) la sentencia de segunda instancia de fecha 2 de julio de 2007, que, confirmando la apelada, declaró fundada la demanda de prescripción adquisitiva de dominio interpuesta



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 00941-2022-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS

por don Demetrio Ruiz Mantilla (Expediente 1441-2007-0-1801-SP-CE-02). Denuncia la violación de los derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva.

En líneas generales, la recurrente alega que en el proceso subyacente se omitió notificar a la Procuraduría Pública del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, lo que vulnera las normas de la tutela procesal efectiva y del debido proceso y causa indefensión al Estado, toda vez que la entidad benéfica emplazada –Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca– carecía de capacidad para ser parte procesal, pues la defensa de sus intereses judiciales debía ser asumida única y exclusivamente por la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en la medida en que desde el año 1996 las sociedades de beneficencia pública del país fueron transferidas al órgano rector, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (Inabif), el cual es un organismo público descentralizado del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

Mediante Resolución 1 (f. 42), de fecha 23 de noviembre de 2007, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima admite a trámite la demanda.

Mediante escrito ingresado el 2 de abril de 2008 (f. 66), el procurador público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial se apersona al proceso y contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente o infundada. Asevera que las resoluciones cuestionadas fueron emitidas dentro del marco de un proceso regular, en el que las partes han hecho valer los medios de defensa que creían convenientes a lo largo del proceso y con respeto irrestricto del debido proceso.

Mediante escrito ingresado el 30 de setiembre de 2013 (f. 425) se apersonan el procurador público municipal y procurador público municipal adjunto de la Municipalidad de Cajamarca, y solicitan ser considerados como parte en la presente causa, aduciendo que al haber concluido el proceso de efectivización de transferencia de funciones y competencias a diversos gobiernos locales provinciales, respecto de las sociedades de beneficencia pública de su circunscripción, entre ellas la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca, ahora les corresponde a ellos ejercer la defensa de los intereses de dicha beneficencia. Además, en



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 00941-2022-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS

el punto II del mismo escrito delegaron la representación procesal a favor del procurador público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de los abogados de la Procuraduría Pública Municipal, para que, en forma individual o conjunta, los representen.

Mediante Resolución 37 (f. 428), de fecha 9 de octubre de 2013, se tiene por apersonada a la Procuraduría Pública Municipal de Cajamarca, para que ejerza la defensa de los intereses de la Beneficencia Pública beneficiada en este proceso constitucional.

Mediante escrito ingresado el 2 de octubre de 2013 (f. 433), se apersona el procurador público de la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien asume la defensa del Estado de acuerdo a la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Mediante Resolución 39 (f. 444), de fecha 20 de diciembre de 2013, se tiene por apersonado al procurador público de la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 58 (sentencia), de fecha 6 de diciembre de 2017 (f. 598), declara infundada la demanda, por considerar que en el proceso subyacente se apersonó la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca, la que, tras dictarse la sentencia de primera instancia declarando fundada la demanda, formuló recurso de apelación y, luego del dictado de la sentencia de segunda instancia que confirmó la apelada, interpuso recurso de casación. Agrega, en relación con el derecho a la tutela procesal efectiva, que las partes comprendidas en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio la han ejercido sin mayor restricción, y tampoco ha habido vulneración al derecho al debido proceso, pues no se ha precisado en la demanda de qué modo pudo haberse producido ello. Por otro lado, respecto a la no participación del procurador público del Mimdes en el proceso de prescripción adquisitiva, sostiene que tal situación no le es imputable a los órganos jurisdiccionales demandados, pues en ningún momento se denunció ni cuestionó este hecho; por el contrario, la Sociedad de Beneficencia Pública asumió la defensa irrestricta en todas sus instancias.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 00941-2022-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha 27 de mayo de 2019 (f. 645), confirma la apelada, por similares fundamentos. Agrega que la participación del procurador público del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) resultaría intrascendente, ya que no modificaría la decisión arribada por los órganos jurisdiccionales en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Precisa que el representante de la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca contaba con mayor acervo probatorio al ser la parte demandada en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, sin advertirse de la revisión de autos que se haya afectado su derecho de defensa, por cuanto contestó la demanda e interpuso sus recursos de apelación y casación. Enfatiza que, si bien la finalidad de los procuradores públicos es defender los intereses del Estado, en el presente caso esto fue salvaguardado por el representante de la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca.

FUNDAMENTOS

Petitorio y determinación del asunto controvertido

1. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) interpone demanda de amparo cuestionando: a) el auto calificadorio del recurso de Casación n.º 3893-2007 – Cajamarca, que declaró improcedente el recurso de casación; b) la sentencia de primera instancia de fecha 29 de diciembre de 2006; y c) la sentencia de segunda instancia de fecha 2 de julio de 2007, que, confirmando la apelada, declaró fundada la demanda de prescripción adquisitiva de dominio interpuesta por don Demetrio Ruiz Mantilla (Expediente 1441-2007-0-1801-SP-CE-02). La demanda se basa, esencialmente, en que, al no haber sido el ministerio demandante notificado para participar en dicho proceso, pese a que las sociedades de beneficencia pública del país fueron transferidas al Instituto Nacional de Bienestar Familiar (Inabif), el cual es un organismo público descentralizado del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, se afectaron sus derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 00941-2022-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS

Consideraciones del Tribunal Constitucional

I. Sobre el derecho al debido proceso

2. El artículo 139, inciso 3 de la Constitución establece como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso. Dicho derecho, a tenor de lo que establece la jurisprudencia atinente, ha sido considerado por este Tribunal como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas (las cuales a su vez son derechos parte de un gran derecho con una estructura compuesta o compleja); entre los cuales se encuentran el derecho al procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etc.

II. Sobre la tutela judicial efectiva y sus alcances

3. Como lo ha precisado este Tribunal Constitucional en diversas sentencias, la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda o no acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia (fundamento 6 de la sentencia emitida en el Expediente 00763-2005-PA/TC).

III. Examen del caso en concreto

4. En el presente caso, el Mimdes interpone demanda de amparo cuestionando: a) el auto calificadorio del recurso de Casación n.º



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 00941-2022-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS

3893-2007 – Cajamarca, que declaró improcedente el recurso de casación; b) la sentencia de primera instancia de fecha 29 de diciembre de 2006; y c) la sentencia de segunda instancia de fecha 2 de julio de 2007, que, confirmando la apelada, declaró fundada la demanda de prescripción adquisitiva de dominio interpuesta por don Demetrio Ruiz Mantilla (Expediente 1441-2007-0-1801-SP-CE-02). La demanda se funda, esencialmente, en que, al no haber sido notificado el Mimdes para participar en dicho proceso, pese a que las sociedades de beneficencia pública del país fueron transferidas al órgano rector, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (Inabif), el cual es un Organismo Público Descentralizado del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, se afectaron sus derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva.

5. Este Tribunal Constitucional hace notar que el proceso subyacente es uno de prescripción adquisitiva de dominio incoado por don Demetrio Ruiz Mantilla contra la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca y otra, respecto de un bien inmueble que perteneció a la citada entidad benéfica.
6. Del *iter* procesal descrito en las sentencias cuestionadas, este Tribunal observa que la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca se apersonó a dicho proceso y ejerció activamente su derecho de defensa, pues formuló apelación contra la sentencia estimatoria de primera instancia y, tras emitirse la sentencia de segundo grado confirmando la apelada, interpuso recurso de casación. Hace notar, igualmente, que ninguno de los sujetos procesales cuestionó la actuación de dicha entidad e, incluso, el representante del Ministerio Público emitió dictamen opinando que se declare fundada la demanda, sin efectuar observación alguna a la defensa ejercida por el representante de la institución benéfica demandada, tal como se lee en la parte expositiva de la sentencia de primera instancia.
7. En ese sentido, si bien es cierto no consta de autos que en el proceso materia de cuestionamiento se hubiera emplazado al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a fin de que su procurador público se apersona a ejercer la defensa de la Beneficencia Pública de Cajamarca; sin embargo, se advierte que los intereses del Estado



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 00941-2022-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS

fueron defendidos por la propia titular del predio materia de usucapión, de modo que no se evidencia que se hubiera encontrado en estado de indefensión, conforme se precisa en el fundamento *supra*.

8. Además, ni el ministerio demandante ni los procuradores públicos que posteriormente se apersonaron a este proceso constitucional, reemplazando al Mimdes en la representación de la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca, han manifestado cuál es la defensa que no se pudo argüir o la prueba que no se pudo presentar en el proceso subyacente, que hubieran podido significar un resultado diferente, por lo que no se advierte una grave y evidente afectación de los derechos al debido proceso o a la tutela procesal efectiva, que justifique la nulidad de lo actuado en el proceso subyacente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar **INFUNDADA** la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

**MORALES SARA VIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH**

PONENTE GUTIÉRREZ TICSE
